

ÁREA RAMA JUDICIAL

La Rama Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la responsabilidad de la consecución de la fe en la justicia como valor fundamental de la sociedad puertorriqueña. Para conseguirlo, resulta necesario desarrollar y mantener un sistema judicial que garantice al ciudadano eficiencia y rapidez en el proceso de impartir justicia.

La Rama Judicial es uno de los tres poderes políticos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los cuales están subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. El poder judicial, conforme al artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado, lo ejerce el Tribunal Supremo y los otros tribunales creados mediante legislación, los cuales en conjunto constituyen un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración.

La estructura organizacional de la Rama Judicial de Puerto Rico está constituida por dos ámbitos; el judicial y el administrativo. El judicial está compuesto por el Tribunal Supremo como tribunal de última instancia, el Tribunal de Circuito de Apelaciones como tribunal intermedio y por el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente constituyen el Tribunal General de Justicia. El administrativo dispone del puesto de Director Administrativo de los Tribunales para asistir al Juez Presidente y por delegación de éste, ofrece dirección administrativa al sistema, aprueba normas y procedimientos administrativos para el Tribunal General de Justicia y realiza monitorias a su cumplimiento.

Las exigencias de nuestros tiempos plantean retos importantes a la Rama Judicial, entre ellos, la crucial tarea de lograr un sistema de justicia de mejor calidad, rápido, económico y accesible. Se manifiesta la necesidad de aprovechar al máximo las aplicaciones de las tecnologías de la información e implantar los cambios que éstas suponen en el derecho procesal, promover métodos alternos de resolución de conflictos, impulsar una pronta resolución de casos y

controversias, tener una judicatura altamente cualificada, ofrecer un acceso efectivo a los tribunales y una política administrativa que permita respuestas ágiles a los cambios sociales.

Por otra parte, en el Programa de Gobierno se incluyó, como unos de los compromisos principales, evaluar los efectos de la implantación de la Ley de la Judicatura de 1994 en cuanto a las competencias, los niveles judiciales, el número de jueces y sus funciones y promover la autonomía fiscal de la Rama Judicial.

RESULTADOS HASTA ENERO DE 2004

En respuesta al compromiso contraído con la Rama Judicial, en enero de 2001 se nombró la Comisión de Reforma Judicial. Luego de dos años de análisis, la Comisión presentó un informe con sus recomendaciones para el Sistema Judicial y el óptimo funcionamiento de los Tribunales. A base de ese informe se configuró la Ley de Reforma Judicial, cuyo propósito es salvaguardar la independencia judicial para futuras generaciones, con particular énfasis en el acceso a la justicia.

Conforme a lo anterior se aprobaron las Leyes 286 del 20 de diciembre de 2002 y 201 del 22 de agosto de 2003. La primera concedió autonomía fiscal a la Rama Judicial, mediante una fórmula presupuestaria, para promover que ésta ejerza su ministerio con independencia de criterio y libres de ataduras a los poderes políticos. La Ley 201 de 2003 formaliza la Reforma Judicial.

Durante el año 2003, la Rama Judicial ha emprendido el camino hacia el desarrollo de un sistema de justicia eficiente y a la vanguardia de nuestros tiempos. Un factor clave para lograrlo ha sido la aprobación de la Ley Núm. 286. Dicha ley dispone que la Rama Judicial recibirá su asignación presupuestaria de acuerdo a un por ciento fijo de las rentas netas anuales ingresadas al Fondo General del Tesoro de Puerto Rico. Esta Ley le permite al poder judicial planificar, presupuestar y

ÁREA RAMA JUDICIAL

gestionar sus proyectos e iniciativas con mayor certidumbre de los recursos con los que cuenta.

Mediante la Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003 se establece, entre otras cosas, de manera explícita y formal las facultades que por mandato constitucional ostenta el Poder Judicial de Puerto Rico; encomienda el establecimiento de un sistema de educación judicial que atienda las necesidades de educación jurídica continua compulsoria y programas educativos para jueces de nuevo nombramiento; establece el objetivo de que el Tribunal de Apelaciones debe brindar mayor acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales, impartiendo justicia apelativa siempre que hayan reclamaciones válidas; dispone que se prestarán los servicios de manera equitativa, sensible y con un enfoque humanista, y que se mantendrá una relación abierta con las otras ramas del gobierno y sectores de la sociedad civil en aras de contribuir al desarrollo de una sociedad sana. Con esa reforma se persigue:

- Proveer un mayor y efectivo acceso a los tribunales mediante el reconocimiento de la necesidad de representación legal de oficio a personas indigentes tanto en los procedimientos civiles como en los criminales.
- Educación judicial obligatoria y continua.
- Orientación a la comunidad sobre el sistema de tribunales sus derechos y responsabilidades.
- Designación de jueces para asuntos especiales y designaciones administrativas.
- Establece normas administrativas y de competencias del Tribunal Supremo, Tribunal de Apelaciones y Tribunal de Primera Instancia para facilitar y agilizar los procedimientos, sobre todo a personas que carecen de representación legal adecuada y de bajos recursos.

- Ampliar la composición del Tribunal de Apelaciones.
- Reduce los jueces municipales y aumenta los jueces superiores.
- Revisa obligatoriamente los dictámenes finales de las agencias administrativas, e incorpora los objetivos de los cánones de Ética Judicial.

Además, la Rama Judicial inauguró durante el año 2003 el Centro Judicial de Mayagüez, el nuevo edificio del Tribunal de Apelaciones y salas municipales en Dorado, Aguas Buenas y Río Grande, edificaciones que mejoran y facilitan el acceso a la ciudadanía, ofrecen comodidad a empleados y usuarios, y brindan una imagen de mayor dignidad al sistema judicial.

En cuanto a la promoción de los métodos alternos de resolución de disputas, en el año 2003 se abrieron tres Centros de Mediación de Conflictos, aumentando así a siete las Regiones Judiciales que cuentan con tales centros. Con relación al mejoramiento profesional e intelectual y el desarrollo de aptitudes judiciales, en agosto de 2003 la Oficina del Juez Presidente estableció la Academia Judicial Puertorriqueña para atender la necesidad de capacitar profesionalmente a los nuevos jueces y juezas y brindarle educación continua a los más experimentados. La referida Academia estará adscrita a la Oficina del Juez Presidente e incorporará al Instituto de Estudios Judiciales de la Administración de Tribunales.

Otras iniciativas realizadas durante el año 2003 por la Rama Judicial incluyen la reincorporación, para fines administrativos, de los salones de asuntos de menores a la Región Judicial en la cual está ubicados, lo cual facilita la atención integral de los asuntos de menores y de familia, y la apertura en Mayagüez de un Centro del Programa de Litigación por Derecho Propio conocido como ProSe, el cual provee información a personas que

ÁREA RAMA JUDICIAL

deseen representarse a sí mismas en ciertos tipos de casos.

En cuanto al uso de tecnologías de la información, se potenció el Sistema de Bibliotecas Integradas como recurso de investigación mediante la digitalización de las Decisiones del Tribunal Supremo y la implantación de un programa informático para normalizar y uniformar los registros bibliográficos; se elaboraron discos compactos para personas con impedimentos visuales y otros impedimentos, los cuales incluyen temas sobre leyes, servicios, procedimientos e información general de la Rama Judicial, y se creó una base de datos electrónica de registro de testamentos, lo cual ha reducido considerablemente el tiempo que tardan en emitirse las certificaciones relativas a testamentos.

PROPUESTAS PARA ENERO 2004 HASTA DICIEMBRE 2005

Al la Rama Judicial se le recomienda un presupuesto consolidado de \$253 millones, de los cuales \$248.7 millones son para gastos operacionales y \$5.0 millones para mejoras

permanentes. El presupuesto del año fiscal 2005 refleja un aumento de \$9.8 millones en comparación con el vigente. Los fondos para gastos operaciones provienen en su mayoría del Fondo General a través de la fórmula presupuestaria que establece la Ley 286 de 20 de diciembre de 2002 que dispone que a partir del año fiscal 2003-2004, a la Rama Judicial se le asignará una cantidad equivalente al 3.4% por ciento del promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e ingresadas en el Fondo General del Tesoro de Puerto Rico en los dos años económicos anteriores al año corriente. Estos recursos se utilizarán para los gastos operacionales de la Rama Judicial, y le permitirán a esta Rama continuar la solución de casos y controversias con independencia, prontitud, diligencia e imparcialidad, y evaluar la constitucionalidad de las leyes.

Además, se recomiendan \$5.0 millones para llevar a cabo mejoras en las facilidades del Tribunal Supremo.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR SECTOR (en miles de dólares)

Sectores	2002 Gasto	2003 Gasto	2004 Vigente	2005 Recomendado	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
Ejecución de la Justicia	211,449	217,233	249,243	258,745	9,502	3.81
Total, Area	211,449	217,233	249,243	258,745	9,502	3.81
Origen de Recursos						
Gastos Operacionales						
Asignación Especial	457	758	243,666	248,581	4,915	2.02

ÁREA RAMA JUDICIAL

Fondos Federales	279	39	310	164	-146	-47.10
Resolución Conjunta	210,713	216,083	0	0	0	0.00
Subtotal, Gastos Operacionales	211,449	216,880	243,976	248,745	4,769	1.95
Mejoras Permanentes						
Otros Ingresos	0	0	0	10,000	10,000	0.00
Préstamos y Emisiones de Bonos	0	353	5,267	0	-5,267	-100.00
Subtotal de Mejoras Permanentes	0	353	5,267	10,000	4,733	89.86
Total Recursos	211,449	217,233	249,243	258,745	9,502	3.81